

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Asignatura: Doctrina estándar de la argumentación.

Alumno: Armando Solis Hernández.

Grupo: 04/2025.

Monterrey, Nuevo León a 01 de junio del 2026.

Principio de proporcionalidad, derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Inicialmente, debemos establecer que **el principio de proporcionalidad** constituye una de las figuras mas importantes dentro del mundo del derecho, inclusive, como lo señalan los autores Rogelio López Sánchez y José Luis Leal Espinoza¹ (pág. 85), dicho principio se ha convertido hoy en día, en una de las herramientas más empleadas por los operadores jurídicos, para justificar racionalmente decisiones donde se encuentran involucrados principios o derechos fundamentales.

Su finalidad, es evitar arbitrariedades a los derechos humanos de las personas, además, es un limite para la autoridad y los actos que esta emite, para que se encuentren debidamente justificados y sean necesarios con el fin que pretende alcanzar.

Desde mi perspectiva personal como servidor público, el principio de proporcionalidad constituye una herramienta jurídica de gran utilidad para la emisión y justificación de los actos de autoridad, particularmente de las resoluciones judiciales, en donde se debe argumentar de manera fundada y motivada conforme al artículo 16 Constitucional, el sentido del fallo.

Además, permite demostrar que las decisiones adoptadas no representan una vulneración arbitraria de los derechos fundamentales de los gobernados, sino que

¹ López Sánchez, R., & Leal Espinoza, J. L. (2018). El derecho a la información y datos personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Dykinson.

obedecen a una finalidad constitucionalmente válida y se encuentran sustentadas en razones objetivas y conforme a derecho.

Por otro lado, el **derecho de acceso a la información pública** establecido en el artículo 6 Constitucional, implica que toda persona puede solicitar, recibir y consultar información que poseen las instituciones y autoridades públicas, sin necesidad de justificar su interés o motive; mientras que **la protección de datos personales** es el derecho que tiene toda persona a controlar el uso, almacenamiento y tratamiento de la información que la identifica o la hace identificable, como su nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, fotografía, huella digital o datos de salud.

Ahora bien, cuando el derecho de acceso a la información entra en conflicto con el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, el principio de proporcionalidad adquiere especial relevancia, dado que, en estos supuestos, corresponde a la autoridad ponderar ambos derechos para determinar cuál debe prevalecer en el caso concreto, procurando que la restricción impuesta sea la mínima indispensable y que no afecte de manera excesiva el contenido esencial de ninguno de ellos.

Así, la proporcionalidad funciona como un mecanismo de equilibrio entre la transparencia gubernamental y la protección de la esfera privada de las personas.

Comparto la postura sostenida por los autores Rogelio López Sánchez y José Luis Leal Espinoza² (pág. 95) respecto a que una de las cuestiones más difíciles a las que se enfrenta el servidor público al momento de determinar si la información pública merece ser restringida o limitada, es decidir cuál principio constitucional prevalece sobre el otro en un conflicto en específico.

Lo anterior, dado que la transparencia y el acceso a la información favorecen la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre la actuación gubernamental; por su parte, la protección de los datos personales salvaguarda la privacidad, la dignidad y la autonomía de las personas.

² Ídem 1.

Por ende, es complejo otorgar prevalencia automática a uno de estos derechos sobre el otro, siendo necesario realizar un análisis individualmente, mediante el principio de proporcionalidad, a fin de determinar cuál de ellos merece una mayor protección en atención a las circunstancias concretas del asunto y procurando siempre la menor afectación posible al derecho que deba ceder.

Un precedente relevante en materia de protección de datos personales se encuentra dentro de la sentencia de la Ley Censo, dictada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán el 15 de diciembre de 1983.

En este caso, el Tribunal examinó la constitucionalidad de una ley que obligaba a los ciudadanos a proporcionar una amplia cantidad de información personal para la realización de un censo nacional, si bien es cierto que se reconoció la legitimidad del interés estatal en obtener datos estadísticos necesarios para la planificación de políticas públicas, también lo es que se concluyó que toda injerencia en la esfera de privacidad de los ciudadanos, debe superar un examen de proporcionalidad y contar con garantías suficientes para evitar usos indebidos de la información recopilada.

Al respecto, debo indicar que comparto el criterio sostenido por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en esta sentencia, porque considero que es legítimo que el Estado realice encuestas y censos para recopilar información que le permita elaborar estadísticas confiables, conocer las necesidades de la población y diseñar políticas públicas más eficientes.

Sin embargo, también es una realidad que muchas personas en nuestro país (México) desconfían de este tipo de mecanismos de recopilación de datos, con frecuencia, cuando servidores públicos acuden a los domicilios para realizar encuestas, los ciudadanos muestran reticencia a proporcionar información personal debido a la incertidumbre sobre el destino de esos datos.

Esta desconfianza se origina, en gran medida, por la falta de información clara respecto de los fines específicos para los cuales serán utilizados los datos recopilados, así como por el temor de que puedan ser compartidos con otras instituciones o empleados para propósitos distintos a aquellos para los que fueron obtenidos.

Por ello, estimo que la recopilación de información por parte del Estado debe estar acompañada de garantías efectivas de protección de datos, transparencia y proporcionalidad, de manera que los ciudadanos tengan certeza sobre el uso de su información y se preserve adecuadamente su derecho a la privacidad.

Precisamente por tal circunstancia, resulta indispensable aplicar el test de proporcionalidad antes referido; porque la obtención de datos debe perseguir una finalidad legítima, ser un medio idóneo para alcanzarla, aunado a que debe limitarse a la información estrictamente necesaria y ofrecer garantías suficientes de transparencia, seguridad y control sobre el tratamiento de los datos personales.

En este sentido, la sentencia de la Ley Censo citada, nos revela que el interés estatal en obtener información no es absoluto y que toda medida que afecte la privacidad de las personas debe justificarse adecuadamente y respetar el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Concuerdo con la postura de López Sánchez y Leal Espinoza³ (pág. 96) respecto a que México el paso gradual hacia una plena efectividad y exigibilidad del derecho de acceso a la información pública, refleja un fortalecimiento institucional del Estado mexicano

No obstante, también estimo que este progreso debe ir acompañado de una protección efectiva de los datos personales, ya que el acceso a la información y el derecho a la privacidad no son derechos opuestos, sino complementarios.

En este sentido, el Estado democrático debe garantizar tanto la apertura de la información pública como el respeto a la esfera privada de los gobernados, evitando que la recopilación o el tratamiento de datos personales se traduzcan en una afectación injustificada de los derechos fundamentales.

³ Ídem 1.

Conclusión.

Como conclusión, el suscrito considera que la protección de los datos personales representa uno de los mayores desafíos jurídicos de la actualidad, especialmente ante el desarrollo de nuevas tecnologías y uso de las redes sociales que facilitan la recopilación y el tratamiento masivo de información.

En este contexto, el principio de proporcionalidad se convierte en una garantía indispensable para evitar excesos por parte de las autoridades y asegurar que toda limitación a la privacidad se encuentre debidamente justificada (fundada y motivada) como todo acto de autoridad.

También estimo que, la transparencia gubernamental y la protección de los datos personales no deben entenderse como derechos contrapuestos, sino como pilares complementarios de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Bibliografía.

Para la realización de este ensayo, se tomó como texto base:

López Sánchez, R., & Leal Espinoza, J. L. (2018). El derecho a la información y datos personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Dykinson.

Sentencia de 15 de diciembre de 1983 del Tribunal Constitucional Federal Alemán (Ref. 1 BvR 209/83) (Fondo) Ley del Censo.